

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Auto de Sustanciación N° 684.

ACCIÓN	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00213-01
DEMANDANTE:	FABIOLA PERDOMO Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

I. ASUNTO A DECIDIR

En el proceso de acción de grupo identificado con el radicado N° 76001-33-31-001-2008-00134-00, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2020 corregida por medio de providencia de 13 de noviembre de 2020, la Sala Especial de Decisión N° 9 perteneciente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió el mecanismo de eventual revisión presentado por las partes demandantes en el que solicitaron revisar la sentencia del 22 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

En la sentencia de 9 de septiembre de 2020 el Consejo de Estado invalidó la decisión de segunda instancia declarando la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por el daño imputado.

Adicionalmente en la parte resolutive del fallo se implementaron medidas adicionales para el cumplimiento de la condena y dar continuidad al proceso conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley 472 de 1998.

Los parámetros determinados fueron los siguientes:

(...) DÉCIMO.- CONDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a pagar la suma de \$23.004.340.598,63 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal. Dicho monto será girado por la entidad condenada con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales del grupo, presentes y ausentes.

Dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se realice la publicación del extracto de esta decisión, los demandantes y beneficiarios deberán acreditar ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali, con prueba idónea, su pertenencia al grupo y el lleno de los requisitos enunciados en la parte motiva de esta providencia para ser beneficiarios de lo dispuesto en esta providencia.

Las solicitudes de los demandantes y beneficiarios presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente por la Defensoría del Pueblo, mediante acto administrativo, en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de su condición y de los requisitos exigidos en la sentencia (inciso 2°, literal b, numeral 3°, artículo 65 de la Ley 472 de 1998).

UNDÉCIMO.- ORDENAR el pago de las indemnizaciones individuales y de las demás personas del grupo, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, una vez tengan la revisión y aprobación previa respectiva. (...)

(...) DÉCIMOSEXTO. ORDENAR al Ministro de Defensa y al Director General de la Policía Nacional, cumplir con las siguientes órdenes de reparación no pecuniarias:

- La realización, en cabeza del señor Ministro de la Defensa y del Director General de la Policía Nacional de un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por los hechos acaecidos el 18 de junio de 2007 en la vereda San José de Tapaje del municipio de El Charco (Nariño), en donde se exalte la dignidad humana de estos funcionarios, con la presencia de sus familiares. Lo anterior, siempre que los últimos así lo convengan.
- La construcción, por parte de las entidades demandadas, de un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse. Lo anterior, siempre que los familiares de las víctimas así lo convengan.
- La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, se remitirá copia auténtica de esta sentencia al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.
- Como la presente sentencia hace parte de la reparación integral, es obligación de las entidades demandadas Ministerio de Defensa- y Director General de la Policía Nacional, la difusión y publicación de la misma por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutive, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente fallo.
- Así mismo, y como garantía de no repetición, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional desde la ejecutoria de la presente sentencia, realizarán capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. Se obliga a estudiar este fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejército Nacional (Policía Nacional).
- Igualmente, se remitirá copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con con la finalidad de que investiguen, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos analizados en la presente sentencia, si aún no se lo ha hecho.
- Copia de esta providencia debe remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que estas entidades públicas en cumplimiento de los mandatos convencionales y convencionales la pongan en conocimiento de las siguientes instancias: (i) del Relator Especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas que elabore actualmente los informes de Colombia, para que se incorpore la información que comprende esta providencia; (ii) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que en su informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; (iii) a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que conozca y tome en cuenta en sus informes del país esta decisión judicial; y, (iv) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en su próximo informe tenga en cuenta esta sentencia. (...)

Mediante auto de 22 de febrero de 2021, se obedeció y cumplió lo resuelto por la Sala Especial de Decisión N° 9 perteneciente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante sentencia de 9 de septiembre de 2020 corregida por medio de providencia de 13 de noviembre de 2020.

En este contexto, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado con fundamento en el artículo 65 de la ley 472 de 1998, por medio de auto de 19 de mayo de 2021 este Despacho dispuso remitir el proceso a la Defensoría del Pueblo para que esta entidad diera cumplimiento a la sentencia de 9 de septiembre 2020 en el sentido de “*tramitar y decidir*” las solicitudes de integración al grupo.

Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2021 los abogados Luis Mario Duque y Héctor Alfonso Carvajal Londoño formularon demanda ejecutiva advirtiendo que a la fecha la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional no

ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2020 y por ende resulta procedente obtener su cumplimiento de acuerdo a lo previsto por el artículo 192 de la ley 1437 de 2011.

II. CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones impuestas en la sentencia de acción de grupo en las cuales se ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional al pago de una suma de dinero equivalente a \$ 23.004.340.598 y adicionalmente adelantar una serie de medidas de reparación no pecuniarias, antes de resolver la solicitud presentada por la parte accionante, el Despacho considera necesario oficiar a las entidades con competencias para el cumplimiento del fallo a efectos de determinar el alcance de la orden de mandamiento ejecutivo.

En consecuencia, se requerirá al Ministerio de Defensa Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que en el término de diez (10) días informe sobre las actuaciones adelantadas para el cumplimiento de la sentencia de 9 de septiembre de 2020 proferida por la Sala Especial de Decisión N° 9 perteneciente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para lo cual deberá remitir prueba idónea y suficiente de las medidas implementadas.

Adicionalmente, se oficiará a la Defensoría del Pueblo para que en el término de diez (10) días informe sobre las actuaciones adelantadas por dicha entidad para el cumplimiento de la orden impartida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en los numerales décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero de la sentencia de 9 de septiembre de 2020 conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley 472 de 1998.

De otro lado, teniendo en cuenta la relevancia de la condena la cual se derivó de la vulneración de derechos reconocidos en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se remitirá copia de la sentencia de 9 de septiembre de 2020, del auto proferido por este Despacho el 29 de septiembre de 2021 y de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación para que conforme a lo señalado el numeral 1¹ del artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 192 de la ley 1437 de 2011² adelante las actuaciones e investigaciones necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad condenada.

En el mismo sentido, en razón al alto monto de la indemnización pecuniaria se remitirá copia de la sentencia de 9 de septiembre de 2020, del auto proferido por este Despacho el 29 de septiembre de 2021 y de la presente providencia a la Contraloría General de la República para que en cumplimiento del artículo 192 de la ley 1437 de 2011 adelante las actuaciones e investigaciones necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad condenada y prevenir un eventual detrimento patrimonial del Estado.

Finalmente, teniendo en cuenta que en el proceso de acción de grupo N° 76001-33-31-001-2008-00134-00 se encuentra en curso el trámite dispuesto en el artículo 65 de la ley 472 de 1998, se advierte a las partes que la solicitud de mandamiento

¹ Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.(...)

²(...) El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarrearán las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar. (...)

ejecutivo se tramitará en un nuevo expediente bajo la radicación N° 76001-33-33-001-2021-00213-01.

En consecuencia, se:

RESUELVE:

PRIMERO: Requerir al Ministerio de Defensa Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que en el término de diez (10) días informe sobre las actuaciones adelantadas para el cumplimiento de la sentencia de 9 de septiembre de 2020 proferida por la Sala Especial de Decisión N° 9 perteneciente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para lo cual deberá remitir prueba idónea y suficiente de las medidas implementadas.

SEGUNDO: Oficiar a la Defensoría del Pueblo para que en el término de diez (10) días informe sobre las actuaciones adelantadas por dicha entidad para el cumplimiento de la orden impartida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en los numerales décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero de la sentencia de 9 de septiembre de 2020 conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley 472 de 1998.

TERCERO: Remitir copia de la sentencia de 9 de septiembre de 2020, del auto proferido por este Despacho el 29 de septiembre de 2021 y de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación para que conforme a lo señalado el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 192 de la ley 1437 de 2011 adelante las actuaciones e investigaciones necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad condenada.

CUARTO: Remitir copia de la sentencia de 9 de septiembre de 2020, del auto proferido por este Despacho el 29 de septiembre de 2021 y de la presente providencia a la Contraloría General de la República para que en cumplimiento del artículo 192 de la ley 1437 de 2011 adelante las actuaciones e investigaciones necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad condenada y prevenir un eventual detrimento patrimonial.

QUINTO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el artículo 46 de ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 186 del CPACA comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: **(2) 896-24-12**
 (2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

MAT

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **87c49fd02c77e847af7ca2e0af8e81cbc7f0b99c18678d1f99a355bf5b062fd8**
Documento generado en 21/10/2021 06:17:21 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>